



JUICIO ELECTORAL

Expediente: TECDMX-JEL-121/2026

Parte actora: [REDACTED]

Autoridad responsable: Órgano
Dictaminador de la alcaldía Iztapalapa

Magistrado ponente: Armando Ambriz
Hernández

Magistrada encargada del engrose:
Laura Patricia Jiménez Castillo

Secretario: Armando Azael Alvarado
Castillo¹

Ciudad de México, 7 de abril de 2026.

Sentencia que sobresee el medio de impugnación, dado que la demanda carece de firma autógrafa.

I. ANTECEDENTES

1. **Convocatoria.** El 9 de enero de 2026,² el Instituto Electoral de la Ciudad de México³ aprobó⁴ la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitarias 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.
2. **Modificación a la convocatoria.** El 24 de enero, el Instituto Electoral modificó⁵ la Convocatoria, en cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral en la sentencia del juicio electoral TECDMX-JEL-2/2026.
3. Lo anterior, en el sentido de establecer que el registro de proyectos de presupuesto participativo por parte de las personas

¹ Colaboró: Daniela Yazmín Martínez Ortega.

² Las fechas se refieren al año 2026, salvo precisión en otro sentido.

³ En lo subsecuente, Instituto Electoral.

⁴ A través del acuerdo IECM/ACU-CG-004/2026.

⁵ Mediante acuerdo IECM-ACU-CG-013/2026.

La leyenda de los datos testados se encuentra al final del presente.

ciudadanas y/o habitantes deberá realizarse en la Unidad Territorial *en que habitan*.

4. **Modificación a los plazos.**⁶ El 24 de febrero y el 4 de marzo, el Instituto Electoral amplió los plazos de la Convocatoria, para quedar de la siguiente manera:

Etapas	Fechas
Registro de los proyectos	25 de enero al 1 de marzo
Dictaminación de los proyectos	4 de febrero al 10 de marzo
Publicación de dictaminación	12 de marzo
Inconformidad	13 al 16 de marzo
Re-dictaminación de los proyectos	17 al 21 de marzo
Publicación de la re-dictaminación	23 de marzo

5. **Registro de los proyectos.** En su oportunidad, la parte actora registró los proyectos denominados “*Computadoras para la Biblioteca*”, con folios IECM-DD29-000388/26 e IECM-DD29-000292/27, en la Unidad Territorial Santiago Acahualtepec (Pblo) de la alcaldía Iztapalapa, para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.
6. **Dictaminación.** De acuerdo con la convocatoria, el 12 de marzo, el Órgano Dictaminador publicó los dictámenes de los proyectos propuestos por la parte actora, los cuales calificó como inviables.
7. **Aclaración.** A decir de la parte actora, el 16 de marzo presentó escrito de aclaración ante el Órgano Dictaminador, para controvertir los dictámenes en sentido negativo de sus proyectos.
8. **Re-dictaminación.** De acuerdo con la convocatoria, el 23 de marzo, el Órgano Dictaminador publicó las re-dictaminaciones de los proyectos de la parte actora, los cuales determinó nuevamente como inviables, al estimar que no cumplían con diversos rubros de viabilidad y factibilidad.

⁶ Mediante los acuerdos IECM-ACU-CG-018/2026 e IECM-ACU-CG-023/2026.



9. **Medio de impugnación.** El 27 de marzo, se presentó la demanda del juicio electoral ante este Tribunal Electoral, a efecto de controvertir la re-dictaminación negativa de los proyectos presentados por la parte actora.
10. **Turno.** En la misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente TECDMX-JEL-121/2026 y lo turnó a la ponencia a su cargo para su sustanciación. Asimismo, en dicha determinación se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera el informe circunstanciado en términos de ley.⁷
11. **Radicación, admisión y cierre de instrucción.** En su oportunidad el Magistrado Instructor radicó el expediente en su ponencia para su sustanciación, admitió a trámite el medio de impugnación y, en consecuencia, declaró el cierre de la instrucción.
12. **Elaboración de proyecto.** En su momento el Magistrado Instructor ordenó la elaboración del proyecto correspondiente.
13. **Rechazo del proyecto y engrose.** En sesión pública de 7 de abril, el Magistrado Instructor sometió a consideración del Pleno de este Tribunal Electoral el proyecto de sentencia correspondiente.
14. Tal propuesta se rechazó por 3 votos en contra de las Magistraturas y, en consecuencia, se ordenó su engrose, por lo que el expediente se turnó a la ponencia de la Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo para su elaboración.

⁷ De conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. En lo subsecuente, Ley Procesal.

II. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

15. Este Tribunal Electoral es competente⁸ para conocer y resolver el juicio electoral, ya que la controversia se relaciona con el desarrollo de un instrumento de democracia participativa de la Ciudad de México, en específico, la determinación de inviabilidad del proyecto propuesto por la parte actora.

SEGUNDA. Sobreseimiento

a. Decisión

16. Con independencia que pudiera actualizarse alguna otra causal de improcedencia, este Tribunal Electoral estima que el medio de impugnación debe sobreseerse, **en virtud de que la demanda carece de la firma autógrafa.**

b. Marco normativo

17. El artículo 17 de la Constitución general establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
18. En este sentido, la Ley Procesal establece en su artículo 47, fracción VIII como requisito de procedencia, que la demanda

⁸ Con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c), numeral 5° y l), así como 122, apartado A, bases VII y IX de la Constitución general; 26, apartado B, 38 y 46, apartado A, inciso g) de la Constitución local; 30, 165, párrafos primero y segundo, fracción V, 171, 178 y 179, fracciones II, III, y VII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 3, 7, fracción II, apartado VI, 14, fracción V, 15, 17 y 26 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México [En adelante, Ley de Participación]; y 31, 37, fracción I, 102 y 103, fracciones I, III y VI de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.



debe presentarse por escrito, así como contener el nombre y la firma autógrafa de quien promueva el medio de impugnación.

19. Así, el artículo 49, fracción XI de la Ley Procesal establece que la falta de firma de una demanda produce su desechamiento.
20. Asimismo, el artículo 50, fracción III, de la Ley Procesal dispone que el Pleno del Tribunal podrá decretar el sobreseimiento, cuando habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en ese ordenamiento.
21. Lo anterior, porque la firma **otorga certeza respecto a la voluntad de ejercer el derecho de promover un medio de impugnación**, al dar autenticidad a la demanda, ya que permite identificar a quien emitió el documento y vincularle con el acto jurídico contenido en la misma.
22. Por ello, ante la falta de firma, no es posible corroborar la manifestación de la voluntad para promover el medio de impugnación y este resulta improcedente.

c. Caso concreto

23. En el caso, se presentó una demanda ante este Tribunal Electoral para controvertir la redictaminación emitida por el Órgano Dictaminador de la alcaldía Iztapalapa, quien determinó que el proyecto presentado por la persona proponente no era viable.
24. Sin embargo, este Órgano Jurisdiccional considera que el medio de impugnación es improcedente, pues de la demanda no se desprende firma autógrafa o huella digital asentada al final o en

alguna otra parte del escrito, por lo que tal documento **no demuestra la manifestación de voluntad de la parte actora** para promover el juicio electoral en que se actúa, lo que motiva su sobreseimiento.

25. Ello, porque la firma autógrafa es un requisito formal indispensable de validez del medio de impugnación que se presente porque representa el vínculo entre la parte actora y el acto jurídico que se realiza, lo que implica la manifestación de la voluntad de quien promueve una demanda para acudir al órgano jurisdiccional para que se resuelva su controversia, de ahí que su carencia constituye la falta de un presupuesto necesario para establecer la relación jurídica procesal.
26. No pasa inadvertido que en la demanda se indica que la parte actora se encuentra en prisión preventiva, sin embargo, no se advierte que realice manifestaciones a fin de exponer algún impedimento para plasmar su firma autógrafa en el escrito.
27. Por el contrario, de la documentación que integra el expediente, en específico, de la “Solicitud de registro de proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”, así como del “aviso de privacidad simplificado”, **se puede evidenciar que la parte actora firmó de puño y letra dicha documentación.**
28. En ese sentido, es evidente que, de ser su voluntad, estuvo en aptitud de plasmar su firma autógrafa en la demanda presentada, tal como lo hizo con los documentos señalados.
29. Ahora bien, dentro del formato “Solicitud de registro de proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”,



anexo a la demanda, existe un apartado en el que se indicó lo siguiente:

“En caso de que mi propuesta de registro sea dictaminada en la etapa correspondiente

A. En sentido negativo:

*Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 197, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, relativos a los procedimientos de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados son verídicos, y solicito, **en caso de que mi registro sea dictaminado en sentido negativo, el proyecto sea re-dictaminado, con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes:***

PETICIONES

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a Ustedes C.C. Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, solicito respetuosamente:

PRIMERO. *Tenerme promoviendo en tiempo y forma, el presente Juicio Electoral, mediante este escrito y pruebas documentales que acompaño.*

SEGUNDO. *Declarar procedente el juicio y entrar al estudio de la cuestión planteada.*

TERCERO. *Revoque el re-dictamen emitido en mi proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente y en plenitud de jurisdicción lo declare viable”.*

Énfasis propio

30. De lo transcrito, en esencia, se advierte la petición de que en caso de ser negativo el dictamen del proyecto presentado, su propuesta sea re-dictaminada con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente.
31. Adicionalmente, en el apartado de peticiones se encuentra dirigido a las personas integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral con la finalidad de que se tenga por presentado en

tiempo y forma el juicio electoral y a partir de ello conseguir la revocación del re-dictamen de su proyecto.

32. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que esa petición no es suficiente para establecer que la demanda del medio de impugnación cuenta con firma autógrafa ni la manifestación de la voluntad de quien promueve una demanda.
33. Lo anterior, porque se puede advertir que este documento contiene la fecha de 20 de febrero, congruente con la etapa de registro de proyectos (25 de enero al 1 de marzo) y previo a la conclusión de las etapas dictaminación (4 de febrero al 10 de marzo) y re-dictaminación (17 al 21 de marzo) correspondientes, **lo que evidencia que no se firmó con la intención de presentar una demanda**, pues en todo caso se trataba de un hecho futuro incierto.
34. Así, la finalidad expresa de ese documento consistía en solicitar la presentación de proyectos para el presupuesto participativo 2026 y 2027, porque es un hecho notorio⁹ que se trata del formato aprobado por el Instituto Electoral, mediante acuerdo IECM-ACU-CG-004/2026, de 9 de enero de 2026, no así de una manifestación redactada por la persona proponente.
35. De ahí que, la solicitud de registro de proyectos no puede considerarse como la presentación de un medio de impugnación para controvertir la re-dictaminación negativa que alega la parte

⁹ De conformidad con el artículo 52 de la Ley Procesal, así como en el criterio orientador contenido en la jurisprudencia XX.2o. J/24 y la tesis I.3o.C.450 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIR EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO", respectivamente.



actora, por lo que el citado documento no puede subsanar la falta de firma autógrafa.

36. Ello, porque la firma otorga certeza respecto a la voluntad de ejercer el derecho de promover un medio de impugnación, al dar autenticidad a la demanda, ya que permite identificar a quien emitió el documento y vincularle con el acto jurídico contenido en la misma, lo que no sucede en el caso.
37. Por otro lado, de las constancias que integran este expediente **tampoco se advierte que la parte actora haya otorgado consentimiento para que alguna persona en su representación presentara un medio de impugnación.**
38. Lo anterior, sin que se pasen por alto las razones esenciales contenidas en la tesis XII/2025,¹⁰ de la Sala Superior, que refiere como excepción, que cuando la persona promovente se encuentre imposibilitada jurídica y materialmente para firmar la demanda de manera autógrafa por pertenecer a un grupo o comunidad en situación de vulnerabilidad, la persona defensora pública podrá firmar en su representación.
39. Al respecto, deben señalarse las circunstancias que rodearon a los asuntos que dieron sustento al criterio jurisprudencial, en los que se advirtió que quienes promovían pertenecían al grupo en situación de vulnerabilidad de personas residentes en el extranjero y que si bien no contaban con firma autógrafa, lo cierto es que **se plasmó la firma electrónica de una persona defensora pública** del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

¹⁰ De rubro "FIRMA ELECTRÓNICA. POR EXCEPCIÓN RESULTA VÁLIDA, SI LA PERSONA DEFENSORA PÚBLICA ELECTORAL SUSCRIBE LA DEMANDA Y ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE PROMOVENTE".

Federación que fue designada por las respectivas partes promoventes como su representante.

40. Ante ello, la Sala Superior estableció una excepción concreta consistente en considerar que si la promoción del medio de impugnación se realizó a través del juicio en línea y quien firmó la demanda de manera electrónica es una persona defensora pública electoral que actúa en representación de la parte promovente, debía flexibilizarse el requisito de la firma autógrafa o electrónica de quien promueve, precisamente por tenerse por satisfecho cuando existan elementos que permitan demostrar con certeza la voluntad de impugnar.
41. En ese tenor, la Sala Superior ha sido congruente al exigir la existencia de una firma autógrafa o electrónica válida, pues en un diverso supuesto,¹¹ consideró que la remisión de la imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de defensa, no libera a la parte actora de presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa.
42. En suma, como puede advertirse, la Sala Superior ha flexibilizado el requisito consistente en la firma de la demanda, sin embargo, **en todos los supuestos se ha asegurado de la existencia de elementos que permitan demostrar con certeza la voluntad de impugnar**, ya sea a través de la firma electrónica de la persona defensora electoral o representante de la parte actora o de la firma autógrafa del propio promovente.

¹¹ Jurisprudencia 12/2019, de rubro "DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA".

43. En el caso, como se expuso, no se advierte manifestación o documento alguno a través del cual la parte actora otorgue representación o designe a un representante, ni la aceptación por parte de otra persona para presentar un medio de impugnación en contra de la re-dictaminación negativa de los proyectos.
44. En consecuencia, debe señalarse que la declaración de improcedencia de los medios de impugnación por el incumplimiento de los requisitos procesales, no implica una denegación de justicia pues el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución General, que contempla el acceso a la impartición de justicia, dispone que en el acceso a la jurisdicción debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo que permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las peticiones deducidas.¹²
45. Además, la exigencia de los requisitos procesales tampoco inobserva lo dispuesto en el artículo 1º constitucional que establece el deber de toda autoridad, dentro de su ámbito competencial, de promover, respetar y garantizar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; pues ello de ninguna manera significa que esta progresividad sea absoluta, ya que encuentra sus límites en los plazos y en los términos de las etapas procesales

¹² Sustenta estas consideraciones, la jurisprudencia P./J. 113/2001 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "JUSTICIA, ACCESO A LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL".

Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA"

y en el cumplimiento de los requisitos de procedencia de los medios de impugnación.¹³

46. De ahí que, la firma constituya un elemento de validez del medio de impugnación que se presenta por escrito, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal.
47. En consecuencia, dado que el medio de impugnación fue admitido en su oportunidad, **procede su sobreseimiento**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, fracción III, en relación con el diverso 49, fracción XI, ambos de la Ley Procesal; toda vez que la demanda carece de firma autógrafa.

TERCERA. Vinculación al Instituto Electoral

48. Por lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima procedente **vincular al Instituto Electoral**, para que previo al siguiente proceso de presupuesto participativo y en los subsecuentes, implemente las acciones necesarias a fin de que las personas que se encuentren en prisión preventiva estén en posibilidades de presentar los medios de impugnación que correspondan cumpliendo los requisitos procesales respectivos.
49. Por lo expuesto y fundado, se

III. RESUELVE

PRIMERO. Se **sobresee** el medio de impugnación.

SEGUNDO. Se **vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de**

¹³ Ello, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA".



México para que proceda en los términos planteados en la parte final de esta determinación.

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda.

PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tecdmx.org.mx), una vez que esta determinación haya causado estado.

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, las Magistraturas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por **mayoría** de tres de votos a favor del Colegiado José Jesús Hernández Rodríguez y las Magistradas Laura Patricia Jiménez Castillo y Karina Salgado Lunar, con el voto en contra de los Magistrados Armando Ambriz Hernández y Osiris Vázquez Rangel, quienes emiten voto particular de manera conjunta, mismo que corre agregado a la presente sentencia, ante la Secretaria General, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO PARTICULAR QUE DE FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS MAGISTRADOS ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ Y OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL, RELATIVO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS ELECTORALES EN LOS QUE SE DESECHAN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA.

Con el debido respeto a nuestros pares, formulamos el presente voto particular, que recupera la parte conducente del proyecto de sentencia del Juicio Electoral en el que se actúa, rechazado por

la mayoría de las integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional:

SEGUNDA. Procedencia.

El medio de impugnación reúne los requisitos de procedibilidad¹⁴, como se explica a continuación:

2.1 Forma.

La demanda se presentó por escrito, y en ella consta el nombre, se identifica el acto reclamado, los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que le causa la determinación de la autoridad responsable.

2.2. Firma autógrafa o huella digital de la parte promovente.

Por lo que hace a la firma de quien promueve, si bien, no se encuentra en el escrito de demanda, dado el contexto de la persona promovente, este Tribunal Electoral considera que es posible tener por satisfecho este requisito en los términos que a continuación se exponen:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las personas detenidas son propensas al potencial abuso de sus derechos, pues se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante la frecuente falta de políticas públicas y condiciones de violación sistemática de sus derechos humanos que son frecuentes en las prisiones.¹⁵

¹⁴ Establecidos por el artículo 47, de la Ley Procesal Electoral.

¹⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Consultable en <https://www.oas.org/es/cidh/ppi/docs/pdf/ppi2011esp.pdf>



Por otro lado, la Sala Superior ha establecido con claridad que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar -ya que no han sido condenadas y, por tanto, se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia- y que la suspensión de los derechos político-electorales a que se refiere la fracción II, del artículo 38 constitucional no puede aplicarse de manera automática sino interpretarse de forma armónica con el derecho al voto y los estándares internacionales de derechos humanos.¹⁶

Asimismo, ha indicado que la problemática que se genera en estos contextos no necesariamente versa sobre el reconocimiento del derecho al voto activo, sino en la falta de mecanismos que permiten ejercerlo, por lo que **el Estado, a través de los Institutos Electorales tiene la obligación de implementar medidas para hacerlo efectivo**, por lo que se estableció la obligatoriedad de la implementación progresiva de programas que garantizaran el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva, con miras a su plena materialización en procesos electorales futuros.

En ese contexto, por lo que hace a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en la Convocatoria se estableció que con el objeto de salvaguardar el derecho de participar en la vida política de la ciudadanía sin sentencia firme que suspenda sus derechos político-electorales, el Instituto Electoral garantizará el derecho de emitir su voto y opinión en la Elección y la Consulta, de conformidad con los principios de inclusión, legalidad, libertad y no discriminación.

¹⁶ Al resolver los juicios ciudadanos SUP-JDC-352/2018 Y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO.

Al efecto, se indicó que las personas en esta condición podrían registrar proyectos en la Unidad Territorial de su preferencia y emitir su opinión durante la Consulta y votar en la Elección en la Unidad Territorial que le corresponda.

Al respecto, en la base Quinta del referido documento convocante se señaló que para la participación de personas en prisión preventiva, el Instituto Electoral se coordinaría con las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México.

Lo anterior, a fin de establecer un convenio de apoyo y colaboración para brindar las facilidades necesarias que les permitan conocer sobre la Elección de las COPACO, y la Consulta, así como registrar proyectos, presentar escritos de aclaración, emitir su votación y opinión y conocer los resultados de la Elección y la Consulta.

Para lo cual, **en atención a las circunstancias propias de las personas en prisión preventiva, se implementaría un formato simplificado¹⁷ para el registro de las propuestas de proyectos de presupuesto participativo mismo que, además, contiene la expresión de la voluntad de las personas que los suscribieron para que, ante la eventual negativa, se presentara el medio de impugnación correspondiente, como se advierte de la parte final del mismo:**

¹⁷ Aprobado por el Instituto Electoral al emitir la Convocatoria Única, como Anexo 8.



En caso de que mi propuesta de registro sea dictaminada en la etapa correspondiente:

A. En sentido negativo:

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 197, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, relativos a los procedimientos de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados son verídicos, y solicito, en caso de que mi registro sea dictaminado en sentido negativo, el proyecto sea re-dictaminado, con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes:

PETICIONES

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a Ustedes C.C. Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, solicito respetuosamente:

PRIMERO. Tenerme promoviendo en tiempo y forma, el presente Juicio Electoral, mediante este escrito y pruebas documentales que acompaño.

SEGUNDO. Declarar procedente el juicio y entrar al estudio de la cuestión planteada.

TERCERO. Revoque el re-dictamen emitido en mi proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente y en plenitud de jurisdicción lo declare viable.

De lo anterior, se obtiene que las personas que firmaron el formato **otorgaron su consentimiento y solicitaron expresamente a las y los Magistrados de este Tribunal Electoral** que, de dictaminarse negativamente el proyecto presentado, **se tuviera por promovido en tiempo y forma el juicio electoral y se revocara el re-dictamen** que eventualmente recaería a la propuesta que se presentó.

Esta cuestión así se considera puesto que, en suma al contexto narrado del cual se advierte la implementación del mecanismo en la Convocatoria para privilegiar la participación del sector, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral allegó al presente expediente diversos elementos que deben tomarse en cuenta para comprender las dificultades materiales que tienen las personas en esta circunstancia, mismas que ponen de manifiesto los impedimentos que tiene este sector para apegarse a los requerimientos que en situaciones ordinarias, se exigen a las personas promoventes de los medios de impugnación.

En ese sentido, señaló lo siguiente:

a. Observancia de los plazos legales:

El diseño normativo procesal electoral establece términos acotados que imposibilitan realizar trámites presenciales en centros penitenciarios una vez conocido el resultado de la redictaminación:

- Publicación en estrados de resultados de redictaminación: 23 de marzo de 2026.
- Plazo para interponer medios de impugnación: Concluye el 28 de marzo de 2026.
- Margen de acción: Se contaba con 5 días naturales entre la publicación del resultado y el vencimiento del plazo legal para impugnar.

Con ello en mente, resultaba complicado poder lograr en tiempo y forma las visitas necesarias para hacer de conocimiento a la persona en prisión preventiva el resultado de la redictaminación, recabar su consentimiento para promover medios de impugnación y nuevamente gestionar una visita para recabar su firma en los escritos de demanda correspondientes en el plazo procesal que se prevé para su tramitación, lo anterior si se toma en cuenta que de acuerdo con el "Procedimiento para gestionar visitas a Centros Penitenciarios", la organización conlleva lo siguiente:

Trámite administrativo: La solicitud a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debe incluir el motivo de la visita, listas



pormenorizadas del funcionariado que ingresará, además de describir los documentos y/o materiales con que se pretende ingresar.

Se requiere gestionar la solicitud de ingreso con al menos ocho días de anticipación a la fecha propuesta, debido a que la subsecretaría en mención, lo turna a la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario quien a su vez lo remite a cada centro, en cada uno de éstos se analiza la solicitud por parte del Comité interno de coordinación que sesionan los miércoles de cada semana para en su caso, aprobar dichas peticiones.

Una vez que se cuenta con la aprobación del ingreso, la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario informa al Instituto Electoral sobre la viabilidad de la visita, al tiempo de cuenta, en el caso particular de la promoción de medios de impugnación, una vez realizada la visita para hacer de conocimiento el resultado de la redictaminación de inviabilidad de proyectos, se suma el tiempo necesario para que en este caso la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México elabore técnicamente el medio de impugnación con los argumentos particulares que atiendan al sentido negativo del dictamen.

b. Idoneidad para implementar el Anexo 8 de la Convocatoria Única:

Considerando la publicación de la redictaminación de proyectos, la instancia administrativa de cara al procedimiento administrativo de ingreso a los centros penitenciarios (8 días) identificó con antelación y en coordinación con la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que dicho trámite superaba en demasía el plazo legal para impugnar, entre que se notificaba a las personas promoventes del resultado y se pudiera generar la firma del medio respectivo, resultaba operativamente inviable agotar el trámite ordinario que se sigue a la interposición de los medios de impugnación, para estar finalmente a tiempo en torno a su promoción ante el Tribunal Electoral antes de la fecha de vencimiento del plazo.

Por lo tanto, la inclusión de las peticiones de Juicio Electoral en el Anexo 8 en el momento del registro se constituyó como la vía idónea considerando las particularidades del trámite para:

- 1. Garantizar el acceso a la justicia:** Permite que la voluntad de impugnar quede manifestada de forma autógrafa, evitando que las pautas procesales y los tiempos ante el ingreso a los centros penitenciarios impidieran el ejercicio de derecho de defensa de las personas en situación de prisión preventiva.
- 2. Cumplir con el principio de inclusión:** Asegurar que este sector de atención prioritaria cuente con ajustes procedimentales que les permitieran ejercer la tutela judicial generando condiciones similares de defensa que el



resto de la ciudadanía, adaptando el procedimiento a sus circunstancias particulares de privación de la libertad.

En conclusión, el consentimiento previo en el Anexo 8 no es solo una medida de facilitación, sino una garantía indispensable para que el derecho a la impugnación de las personas en prisión preventiva no se convierta en una letra muerta debido a la incompatibilidad entre los plazos judiciales y los protocolos de seguridad penitenciaria.”

De lo anterior, se obtiene que el Instituto Electoral expone las condiciones que tornan de imposible cumplimiento los requisitos que suelen exigirse a la ciudadanía en general al interponer un medio de impugnación, tal como lo es que deben apearse al "Procedimiento para gestionar visitas a Centros Penitenciarios", el cual, en conclusión, **implica el plazo mínimo de ocho días para que tal solicitud sea atendida y agendada por el comité correspondiente, el cual sesiona cada miércoles**, cuando, en el caso concreto, entre la publicación de la redictaminación y la fecha para presentar las demandas transcurrieron cinco.

De ahí que reitero que se tenga por eficaz el mecanismo implementado en la Convocatoria ante las complejas condiciones que tienen las personas en prisión preventiva y se tenga por expresada la voluntad contenida en el anexo 8, suscrito con la intención de atenuar esta dificultad y hacer posible la participación de este sector.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que **la parte actora suscribió el citado formato simplificado**, identificado

como “Solicitud de Registro de proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027” **con el objeto de hacer posible su participación en los términos indicados por la base quinta de la convocatoria.**

- **Marco normativo aplicable al presente caso y principio de completitud.**

En ese sentido, conforme a lo previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (los cuales contemplan los principios de interpretación más favorable a la persona, a favor de la acción, y de la acceso a la justicia), tal circunstancia es suficiente para colmar el requisito de asentar la firma en la demanda, puesto que ello expresa de manera fehaciente, la manifestación de la voluntad de quien suscribe el escrito inicial, de acudir ante este Tribunal, en la vía y forma correspondiente, para deducir sus derechos.

Ello en apego al principio de completitud, que impone a las personas juzgadoras la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones y elementos que les sean presentados¹⁸.

Lo anterior, atendiendo lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto al derecho de toda persona a una justicia “pronta, completa e imparcial”, que

¹⁸ Sobre los alcances del principio de completitud, véase la tesis con registro digital 2005968, de rubro **EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.**



contempla la tutela judicial efectiva.

¿Los derechos que tienen restringidos las personas en prisión preventiva no impactan al momento de impugnar la redictaminación?

Las personas en prisión preventiva no solo se encuentran privadas de la libertad, sino que tienen restringidos **un cúmulo de derechos humanos, como lo son, entre otros, los de:**

- tránsito,
- asociación,
- reunión,
- **a la información** *-no fluye la información en prisión como sucede fuera de esos límites materiales-*,
- **al trabajo,**
- **a la vivienda,**
- **acceso a la cultura,**
- acceso al internet.

Consideremos entonces, que, quienes tienen restringido el acceso a internet, a sus comunicaciones, a la información, debían enterarse del resultado de la redictaminación para decidir si impugnan o no esa determinación.

Resulta evidente que la posibilidad de enterarse al mismo tiempo que la población en libertad no es exigible, y que si a ello le sumamos que tras eso, debían contactar a la persona que les redactaría o los asesoraría para presentar la demanda, luego, conocer puntualmente los términos de la demanda, para finalmente firmarla, y todo ello en cuatro días, lo que ha sido

considerado como razonable para las personas en libertad, pero no resulta así para las personas respecto de las cuales, como ya se ha señalado, es necesario pedir autorización para ingresar a verlas y llevarles los documentos necesarios para poder presentar la demanda, lo que lleva, como se ha precisado antes, más de ocho días, lo que supera el límite legalmente impuesto.

En este sentido, hay que considerar que el plazo de cuatro días para impugnar se encuentra en la normativa desde la misma se publicó por primera vez en 1999¹⁹, y que el derecho de las personas en prisión preventiva para presentar proyectos dentro del mecanismo de presupuesto participativo como participación ciudadana, data del año 2025, lo que muestra que no se ha considerado esta situación del grupo vulnerable en el marco normativo.

¿Las personas en prisión preventiva deben asumir la omisión legislativa o un inadecuado marco desarrollado por el IECM?

No.

Aunque el marco normativo aplicable no prevé que, dada la situación material de las personas en prisión preventiva, de algún medio de impugnación adecuado para reparar violaciones a sus derechos político, **al tener restringidos un cúmulo de derechos humanos (como ya se ha precisado)**, en un ejercicio que evite la discriminación de este grupo y a fin de hacer posible

¹⁹ Desde el entonces Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 5 de enero de 1999, se preveía como requisito para la presentación del otrora recurso de apelación hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Asimismo, la primera ley específica en materia procesal electoral para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México- la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 2007, señala, entre otros requisitos que deben considerar las demandas, el nombre y la firma autógrafa del promovente. Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, a través de una reforma publicada el 13 de noviembre de 2023, incorporó el derecho de las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme a emitir su voto en diversas elecciones, entre otras, las de presupuesto participativo en esta entidad.



la igualdad sustantiva, este Tribunal considera que las personas que se encuentren en tal circunstancia pueden acudir a reclamar la violación a sus derechos político-electorales si han expresado esa voluntad en un formato firmado de forma previa a la elaboración de la demanda.

De ahí que, en el caso en concreto resulta conforme a derecho realizar un ajuste razonable ponderando la situación de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que solicitaron el registro de un proyecto para ejecutarse con presupuesto participativo en la Ciudad de México, de esta manera se genera igualdad sustantiva entre todas aquellas personas que ejercen su derecho a participar en la definición de los proyectos que serán sometidos a elección el día de la jornada electiva, lo anterior porque **resulta necesario ponderar la situación de desventaja en que se encuentran** conforme a lo siguiente:

1. El derecho a participar en esta consulta es un fin constitucionalmente válido, porque constituye un mecanismo fundamental de **democracia participativa** y deliberativa, por el que las alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana garantizado que la ciudadanía intervenga directamente en la toma de decisiones sobre el destino de una parte de los recursos públicos²⁰.

2. Permitir a las personas que se encuentran en prisión preventiva impugnar de forma previa a conocer el resultado de la re dictaminación de sus proyectos, es una medida idónea porque permite garantizar su derecho de acceso a la justicia

²⁰ Artículo 26 de la Constitución Local.

dada las restricciones a su derecho a la información, porque no hay constancia de cuando se enteraron en prisión de los resultados y dado que esta información en prisión preventiva no es de circulación libre sino restringida.

3. En casos como el que se analiza, impugnar de manera previa **es una medida necesaria**, porque no se advierte alguna otra posibilidad para que pudieran impugnar cumpliendo con la oportunidad de ley, pues tendrían que enterarse del resultado de la re- dictaminación, contactar con quienes elaborarían la demanda, se tendría que elaborar la misma y luego llevárselas a firmar, contando con la posibilidad de reunirse con la persona en prisión preventiva de conformidad con las exigencias administrativas, de seguridad y actividades preagendadas del centro de reclusión, todo es en los siguientes cuatro días a que surtiera efectos la notificación de la re-dictaminación.

Considerando que entre que, se solicita a las autoridades del centro de reclusión y que es posible ingresar a recabar la firma, transcurre una semana.

4. Es **proporcional** en sentido restringido porque logrando el acceso a la justicia, aunque se flexibiliza de manera razonable un requisito de procedibilidad, solo se afecta un derecho instrumental o procedimental en favor del derecho sustantivo de acceso a la justicia, sin que se lesione el derecho de algún tercero, pues el admitir a trámite la demanda no dice nada aún respecto a que lo planteado en la misma sea correcto.

De esta manera, cuando la expresión de la voluntad para impugnar posterior a la elaboración de la demanda se encuentra limitada por las condiciones de reclusión, pero que es posible identificar de forma innegable en un formato suscrito de forma



autégrafa de forma previa, este Tribunal tiene la **obligación ineludible de resolver el conflicto** planteado, incluso cuando no existe una norma jurídica específica aplicable a la situación.

¿Cómo debe interpretarse la firma autógrafa plasmada en el Anexo 8 de la solicitud de registro de proyectos?

Primeramente, es un hecho no controvertido que la firma que se encuentra plasmada en el documento es autógrafa y que corresponde al actor.

En segundo lugar, es posible concluir que la firma del formato referido no puede considerarse como el consentimiento para impugnar dado que no se conoce en ese momento ni la resolución de la re-dictaminación, ni el contenido de la demanda, sin embargo, es conforme a derecho concluir que es voluntad de las personas en prisión preventiva, agotar la cadena impugnativa, dado el caso de que no se redictamine de forma favorable a sus intereses.

Y entre esas dos posibles interpretaciones, a fin de estar a lo que más favorezca a los integrantes del grupo vulnerable, se considera que debe estarse a la segunda interpretación de su firma autógrafa.

Solo eso permite cumplir con el parámetro constitucional y convencional²¹.

²¹ Constitución Local. **Artículo 4** *Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos.* **1.** En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales... **6.** Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de

- **Conclusión respecto a la presencia de firma autógrafa.**

En el caso, en la última foja del escrito de demanda, con posterioridad al apartado de peticiones, se aprecia únicamente el nombre completo de la persona promovente.

Y si bien tal circunstancia, en principio, podría actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 49 fracción XI de la Ley Procesal, **una interpretación más favorable a los derechos humanos de las personas proponentes en situación de prisión preventiva permite afirmar que sí se colmó ese requisito de procedibilidad con la firma autógrafa del Anexo 8.**

Así, es que este Tribunal Electoral, en atención a las condiciones particulares que tiene este grupo en situación de vulnerabilidad y debido a que el diseño normativo imposibilitaría el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales (y de participación ciudadana, en este caso) es que **se tiene por expresada la voluntad en los términos del anexo que fue debidamente suscrito y dirigido a este tribunal en fecha previa**, con el objeto de que se tuviera por presentada su inconformidad ante la eventual dictaminación en sentido negativo de su proyecto.

Determinar lo contrario, **implicaría la denegación de justicia y el desconocimiento pleno del mecanismo aprobado en la Convocatoria para privilegiar la participación de las**

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución...

C. Igualdad y no discriminación 1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. **Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.**



personas en prisión preventiva, lo cual, a la postre generaría la preservación de la problemática identificada por la Sala Superior, de ahí que se tenga, por excepción, por debidamente cumplido el requisito.

2.2 Oportunidad. Por regla general, los medios de impugnación deben ser promovidos dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del acto impugnado o que haya sido notificado el mismo.

En este contexto, tomando en consideración que el acto impugnado se notificó el día veintitrés de marzo y la presentación de la demanda se realizó el veintisiete de marzo, resulta evidente que la demanda fue presentada oportunamente.

2.3 Legitimación e interés jurídico. Estos requisitos se tienen por satisfechos²², debido a que la parte actora controvierte la segunda dictaminación negativa de los proyectos que presentó.

2.4 Definitividad. Este requisito se encuentra cumplido dado que no existe un medio de impugnación diverso que la promovente deba agotar previo a acudir a la presente instancia.

2.5 Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de modo irreparable porque, de estimarse fundados los agravios, aún es susceptible de revocación, modificación o anulación por este órgano jurisdiccional y, en consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico que se considera transgredido.

²² De conformidad con lo previsto en el artículo 46, fracción IV, y 103, fracción I, de la Ley Procesal Electoral.

TERCERA. Materia de la controversia.

Este Tribunal Electoral analizará de manera íntegra el escrito de demanda²³, a efecto de identificar los agravios, con independencia de su ubicación, toda vez que no es requisito que estén contenidos en un capítulo especial. De ser el caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte actora y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia.²⁴

Lo anterior no implica una suplencia total, ante la ausencia de hechos de los que se desprendan agravios, ya que corresponde a la parte actora la carga de indicar, al menos, la lesión que ocasiona el acto o resolución impugnados, así como los motivos que originaron ese perjuicio²⁵. De esta manera, este órgano jurisdiccional no está obligado a estudiar oficiosamente agravios que no fueron invocados, puesto que ello no constituiría una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de las personas que promueven.

3.1 Pretensión.

La pretensión de la parte actora es que se revoque la segunda dictaminación de inviabilidad que se emitió respecto de los proyectos que presentó, a fin de que se emita uno nuevo fundado y motivado, y se determine su viabilidad.

²³ En ejercicio de la atribución dada por los artículos 89 y 90, de la Ley Procesal.

²⁴ Al respecto, es aplicable en lo conducente la **Jurisprudencia J.015/2002** de este Tribunal Electoral, de rubro: **"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL"**.

²⁵ De conformidad con el artículo 47, de la Ley Procesal Electoral.

3.2. Causa de pedir.

La causa de pedir radica en la falta de fundamentación, motivación y exhaustividad del acto impugnado, lo cual genera una vulneración al derecho de participación de la promovente.

3.3 Agravios.

En esencia, la parte actora sostiene que los re-dictámenes controvertidos vulneran sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, al carecer, desde su perspectiva, de una debida fundamentación y motivación, por lo siguiente:

- La omisión de la autoridad responsable de expresar de manera clara y suficiente las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, así como las razones específicas que sustentan la determinación de inviabilidad de los proyectos.
- La falta de un análisis técnico individualizado de sus propuestas, ya que los re-dictámenes se limitan a consideraciones genéricas, lo que impide conocer las causas reales de su calificación como no viables.
- La imposibilidad de controvertir de manera efectiva la decisión adoptada por el órgano dictaminador, derivado de dicha deficiencia argumentativa, lo cual incide en su derecho de participación en condiciones de igualdad dentro del proceso de presupuesto participativo.

3.3 Metodología.

Los motivos de inconformidad se analizarán en el orden en que fueron expuestos, sin que ello cause afectación jurídica a la parte actora porque lo relevante es que todos sus agravios sean estudiados con independencia del orden con el que se realice.²⁶

CUARTA. Estudio de fondo.

4.1 Decisión.

Este Tribunal considera que los motivos de disenso expuestos por la promovente resultan **fundados**, por lo que lo procedente es **confirmar** la segunda dictaminación llevada a cabo por el órgano dictaminador de la Alcaldía Iztapalapa.

4.2 Marco normativo.

4.2.1 Presupuesto Participativo.

El Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos económicos que otorga el Gobierno de la Ciudad²⁷. La finalidad es que sus habitantes optimicen su entorno, al proponer obras y servicios, equipamiento y la infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales, sin que, de forma alguna suplan o subsanen las obligaciones que las alcaldías deben realizar como actividad sustantiva.

El Presupuesto Participativo deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido

²⁶ En términos de la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: "**AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**". Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.

²⁷ De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Participación.



social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.²⁸ Los recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras, servicios, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.

Las etapas de la Consulta son las siguientes:

a. Emisión de la convocatoria. Le corresponde al Instituto Electoral.²⁹

En colaboración con el Gobierno de la Ciudad, garantizará que en cada una de las unidades territoriales se publiciten las distintas etapas de la consulta, entre ellas, el instrumento convocante.³⁰

b. Asamblea de diagnóstico y deliberación. En cada una de las unidades territoriales se llevará a cabo una Asamblea Ciudadana con el fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas.³¹ Para ello contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia.³²

c. Registro de proyectos. Toda persona habitante de una unidad territorial podrá presentar proyectos de Presupuesto Participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital.³³

²⁸ Artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Participación.

²⁹ Artículo 120, inciso a), de la Ley de Participación.

³⁰ Artículo 123 de la Ley de Participación.

³¹ De acuerdo con la Base Primera de la Convocatoria, se celebraron del dieciocho de enero al quince de febrero. La publicación de las convocatorias, en la Plataforma Digital, se hará a partir del 16 de enero y hasta el 12 de febrero de 2026; y, de los listados de problemáticas y prioridades, a partir del 19 de enero y hasta el 20 de febrero de 2026 en la Plataforma Digital.

³² De conformidad con el artículo 120, inciso b) de la Ley de Participación.

³³ El artículo 120, inciso c) de la Ley de Participación. De conformidad con la Base Segunda de la Convocatoria, la presentación fue desde las 09:00 horas del quince de enero hasta las 24:00 horas del 1 de marzo, a través de la Plataforma Digital; y del veinticinco de enero al uno de marzo, en las

d. Validación técnica de los proyectos. El órgano dictaminador de cada alcaldía evaluará el cumplimiento de los requisitos de los proyectos, para lo cual deberá contemplar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto y beneficio comunitario y público.³⁴

Esto ocurrirá conforme al calendario que establezca cada órgano dictaminador, el cual será publicado en la Plataforma del Instituto Electoral.³⁵ Una vez que sean dictaminados los proyectos serán remitidos al Instituto Electoral.

4.2.2 Principio de legalidad.

De acuerdo con el principio de legalidad, todos los actos y resoluciones en materia electoral deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y a las disposiciones legales aplicables. En ese sentido, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, establece el imperativo para toda autoridad de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de las personas.

Las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación deben satisfacerse en atención a la naturaleza del acto emitido. Así, la fundamentación implica la cita precisa de los preceptos legales aplicables al caso concreto, mientras que la motivación consiste en la expresión clara, lógica y congruente de las razones

oficinas de la Dirección Distrital que corresponda a la unidad territorial en la que se quiera registrar proyecto.

³⁴ Artículo 126, de la Ley de Participación.

³⁵ Del cuatro de febrero al diez de marzo se realizará la dictaminación de los proyectos.

El doce de marzo serán publicadas las dictaminaciones en la Plataforma Digital y en los estrados de las Direcciones Distritales.

Las personas proponentes cuyos proyectos sean calificados inviables podrán presentar del trece al dieciséis de marzo, un escrito de aclaración ante el órgano dictaminador o un juicio ante el Tribunal. Del diecisiete al veintiuno de marzo, los órganos dictaminadores realizarán la segunda dictaminación de proyectos en atención a los escritos de aclaración presentados. El veintidós de marzo enviarán los proyectos de nuevos dictámenes a las Direcciones Distritales Cabecera de Demarcación para que sean entregados a las Direcciones correspondientes, y serán publicados el veintitrés de marzo.



y circunstancias particulares que llevaron a la autoridad a emitir la determinación correspondiente, debiendo existir una adecuada correspondencia entre los hechos del caso y las normas jurídicas invocadas.

En este sentido, no basta con señalar de manera genérica disposiciones legales o formular afirmaciones abstractas, sino que la autoridad está obligada a exteriorizar un razonamiento que permita advertir por qué, en el caso específico, se actualiza el supuesto normativo que sustenta su decisión.

El referido principio de legalidad se encuentra estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, por lo que tales exigencias deben observarse de manera estricta por las autoridades al emitir actos que incidan en los derechos de participación ciudadana.³⁶ Ahora bien, la inobservancia de dicho mandato constitucional puede manifestarse bajo dos vertientes: la falta de fundamentación y motivación, o bien, su indebida o incorrecta realización.

La falta de fundamentación y motivación se actualiza cuando la autoridad omite citar los preceptos legales aplicables o deja de expresar las razones que justifican su determinación; mientras que la indebida fundamentación y motivación ocurre cuando, aun citando normas y exponiendo argumentos, éstos no resultan aplicables al caso concreto o no guardan congruencia con los hechos que se pretenden sustentar.

³⁶ Tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 21/2001, de rubro “**PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL**”.

En este contexto, la debida fundamentación y motivación no sólo constituye una formalidad exigida por la Constitución, sino que tiene como finalidad garantizar el principio de certeza jurídica, entendido como el derecho de las personas a conocer con claridad, precisión y congruencia las razones que sustentan los actos de autoridad, a fin de evitar arbitrariedades y permitir el ejercicio pleno de sus derechos.

Ahora bien, el principio de **exhaustividad** consiste en que las autoridades, administrativas y jurisdiccionales, agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas. Este principio debe satisfacerse mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas en el obstáculo de que se trate, pues si bien es cierto que la falta de una formalidad esencial (o de un presupuesto procesal) no permite resolver el contenido sustancial atinente, también es verdad que esto no constituye ningún obstáculo para que se examinen los demás elementos que no correspondan a los aspectos sustanciales, por lo que la omisión al respecto no encuentra justificación, y se debe considerar atentatoria del principio de exhaustividad³⁷.

³⁷ Conforme a la tesis **XXVI/99** emitida por la Sala Superior de rubro: **EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES.** Consultable en <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/>



4.2.3. Participación de personas en prisión preventiva, como proponentes para la consulta de Presupuesto Participativo 2026 -2027

En términos de Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en el presupuesto participativo podrán participar todas las personas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Participación y plasmados en la Convocatoria, incluyendo a las **personas ciudadanas en situación de prisión preventiva**, quienes podrían registrar proyectos **en la UT de su preferencia**; y emitir su opinión durante la Consulta en la UT que le corresponda.

En tanto que, en la Base Quinta de la citada Convocatoria, para la participación de personas en prisión preventiva, el IECM se coordinará con las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México, a fin de establecer un convenio de apoyo y colaboración para brindar las facilidades necesarias que les permitan conocer sobre la Consulta, registrar proyectos, presentar escritos de aclaración, emitir su opinión y conocer los resultados de la Consulta.

El IECM identificará las Unidades Territoriales en las que están registradas las personas en prisión preventiva, según la Lista Nominal de Electores con Fotografía en Prisión Preventiva - LNEPP- de la Ciudad de México, a fin de que emitan su opinión en la UT que les corresponda.

De así resultar procedente, la conformación de la LNEPP se realizará en atención a las previsiones técnicas que lo hagan posible y que así determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

Las personas en prisión preventiva podrán participar siempre y cuando:

- a) No hayan sido suspendidas de sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria o resolución en la que se imponga como pena la suspensión de los derechos indicados;
- b) Estén en el supuesto de prisión preventiva en un centro penitenciario de la Ciudad de México, y
- c) Manifiesten su intención de emitir su opinión de manera anticipada.
- d) Se mantengan en el Centro Penitenciario en el que fueron registrados en la fecha en la que se lleve a cabo la Jornada Anticipada para dicho centro.
- e) Estén inscritas en la LNEPP de la Ciudad de México, con corte al quince de marzo.

4.3 Caso concreto.

Tal como fue señalado, la parte actora controvierte los re-dictámenes emitidos por el órgano responsable, al estimar que carecen de la debida fundamentación y motivación.

Asimismo, sostiene que se vulnera el principio de exhaustividad, en tanto que la autoridad responsable no realizó un análisis puntual de los planteamientos formulados en su escrito de

aclaración, presentado con la finalidad de que el dictamen inicial fuera reformulado.

Constituye un hecho notorio³⁸ la existencia y contenido de los dictámenes y re-dictámenes correspondientes a los proyectos, emitidos por el Órgano Dictaminador, al encontrarse publicados en la página electrónica del Instituto Electoral³⁹

Por lo que hace a los primeros dictámenes y el re-dictámenes de dichos proyectos, en la parte que interesa, se advierte lo siguiente:

Primera dictaminación	Segunda dictaminación (acto impugnado)
Impacto comunitario	
NO VIABLE, incumple con lo establecido en el artículo 117 de la ley de participación ciudadana de la ciudad de México, debido a que puede generar descontento social.	NO VIABLE, incumple con lo establecido en el artículo 117 de la ley de participación ciudadana de la ciudad de México, debido a que puede generar descontento social.
Factibilidad y viabilidad técnica	
ES VIABLE, siempre que se cumpla con la normatividad aplicable, así como con las normas de calidad, solicitadas por la alcaldía, llevado el asesoramiento del área ejecutora y hasta donde el presupuesto alcance.	ES VIABLE, siempre que se cumpla con la normatividad aplicable, así como con las normas de calidad, solicitadas por la alcaldía, llevado el asesoramiento del área ejecutora y hasta donde el presupuesto alcance.
Factibilidad y viabilidad jurídica	
NO VIABLE, el presupuesto participativo permite a los ciudadanos decidir cómo se utiliza una parte del presupuesto público para mejorar su entorno, fortalecer el desarrollo comunitario y	NO VIABLE, el presupuesto participativo permite a los ciudadanos decidir cómo se utiliza una parte del presupuesto público para mejorar su entorno, fortalecer el desarrollo comunitario y

³⁸ De conformidad con el artículo 52 de la Ley Procesal.

³⁹ Por ello, es aplicable la jurisprudencia XX.2o. J/24, de los Tribunales Colegiados, de rubro “**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR**”, J/; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470. XX.2o. J/24.

<p>fomentar la convivencia que atienden necesidades específicas de cada unidad territorial, para las unidades territoriales será en el mejoramiento de espacios públicos, infraestructura urbana, obras y servicios y actividades deportivas, recreativas y culturales y en el caso de unidades habitacionales para el mejoramiento, mantenimiento, servicio, obras y reparaciones de áreas y bienes de uso común, punto de acuerdo que se hace del conocimiento de los asistentes a la asamblea, quienes se deberán dar por enterados. No obstante, lo anterior, en la presentación de este tipo de proyecto los proponentes omiten estas condicionantes al solicitar la intervención en un espacio de uso privado al no encontrarse registrado en el inventario de bienes inmuebles de la alcaldía Iztapalapa, obstaculizando el lograr realizar la intervención por parte de ella, en consecuencia, el proyecto no cumple con lo establecido en los artículo 116 y 117 de la Ley de Presupuesto Participativo de la Ciudad de México.</p>	<p>fomentar la convivencia que atienden necesidades específicas de cada unidad territorial, para las unidades territoriales será en el mejoramiento de espacios públicos, infraestructura urbana, obras y servicios y actividades deportivas, recreativas y culturales y en el caso de unidades habitacionales para el mejoramiento, mantenimiento, servicio, obras y reparaciones de áreas y bienes de uso común, punto de acuerdo que se hace del conocimiento de los asistentes a la asamblea, quienes se deberán dar por enterados. No obstante, lo anterior, en la presentación de este tipo de proyecto los proponentes omiten estas condicionantes al solicitar la intervención en un espacio de uso privado al no encontrarse registrado en el inventario de bienes inmuebles de la alcaldía Iztapalapa, obstaculizando el lograr realizar la intervención por parte de ella, en consecuencia, el proyecto no cumple con lo establecido en los artículo 116 y 117 de la Ley de Presupuesto Participativo de la Ciudad de México.</p>
Factibilidad y viabilidad ambiental	
<p>VIABLE, no se tiene inconveniente alguno en que se lleve a cabo el proyecto, siempre y cuando se observe que con el proyecto en cuestión no se contravengan disposiciones normativas en materia ambiental.</p>	<p>VIABLE, no se tiene inconveniente alguno en que se lleve a cabo el proyecto, siempre y cuando se observe que con el proyecto en cuestión no se contravengan disposiciones normativas en materia ambiental.</p>
Factibilidad y viabilidad financiera	
<p>NO VIABLE, el proyecto no tiene viabilidad financiera, en su porcentaje correspondiente ya que no se asegura que su ejecución represente un impacto en beneficio comunitario y público contraviniendo el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana. Además de que las erogaciones al capítulo 4000 no pueden superar el 10% del monto ejercido del presupuesto participativo.</p>	<p>NO VIABLE, el proyecto no tiene viabilidad financiera, en su porcentaje correspondiente ya que no se asegura que su ejecución represente un impacto en beneficio comunitario y público contraviniendo el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana. Además de que las erogaciones al capítulo 4000 no pueden superar el 10% del monto ejercido del presupuesto participativo.</p>



De esta forma, resulta evidente que la autoridad responsable citó precepto jurídico aplicable, expresando para tal caso la motivación considerada para cada uno de los rubros, por lo que es claro que **cumplió con el deber de fundar y motivar** el acto materia de controversia.

Por consiguiente, se desprende que el Órgano Dictaminador se ajustó a lo establecido en el artículo 126, último párrafo, de la Ley de Participación.

Ahora bien, la parte actora en su escrito de demanda señala una vulneración al principio de **exhaustividad**; sin embargo, al contrastar la valoración de los rubros contenidos en los dictámenes y re-dictámenes se desprende que la autoridad responsable, si bien, existe similitud en las determinaciones bajo los rubros jurídico, financiero e impacto comunitario, también lo es que de los argumentos expuestos por la parte actora en su escrito de aclaración realizó manifestaciones vagas y genéricas no dirigidas a controvertir la totalidad de los rubros calificados como no viables.

Esto es, del contenido de los escritos de aclaración presentados por la parte actora a efecto de controvertir la dictaminación primigenia, esencialmente se desprende lo siguiente:

- La falta de verificación de la autoridad responsable sobre la naturaleza del inmueble, dado que el espacio que ocupa la biblioteca actualmente opera como una biblioteca pública abierta a toda la comunidad.
- La ausencia de registro en el inventario de la Alcaldía no puede, por sí sola, constituir un motivo suficiente para

negar un proyecto que fortalece un espacio público ya existente.

De lo anterior, se desprende que la parte actora únicamente se refiere a la naturaleza del inmueble, solicitando se lleve a cabo una búsqueda exhaustiva en el inventario bienes del Gobierno de la Ciudad de México o en los registros de la Red Nacional de Bibliotecas a fin de verificar formalmente la situación administrativa de la biblioteca, a efecto de determinar no la pertenencia a la Alcaldía Iztapalapa sino para acreditar su uso de carácter público, situación que se aleja de lo re-dictaminado.

Es por tanto, que los agravios expuestos por la parte actora resultan **infundados**.

Lo anterior, al advertirse de las constancias que obran en autos, de los re-dictámenes controvertidos, que el órgano dictaminador sí precisó los elementos normativos y técnicos que sustentan la determinación de inviabilidad de los proyectos, exponiendo las razones por las cuales estos no cumplen con los criterios de viabilidad jurídica y financiera, así como con el impacto de beneficio comunitario exigido por la normativa aplicable.

Por otra parte, no asiste razón a la parte actora cuando sostiene una falta de exhaustividad, ya que de la lectura integral de los escritos de aclaración de la parte actora no se desprenden elementos que sirvan de apoyo para controvertir las razones y fundamentos en los que la responsable basó su determinación; además de que no aportado algún elemento probatorio que derrotara la manifestación de la autoridad responsable, ni controvirtió frontalmente lo manifestado por éste ya que únicamente se limitó a referir que el dictamen primigenio adolecía



de una debida fundamentación y motivación en contravención a al marco normativo constitucional y de participación ciudadana.

En ese sentido, el hecho de que la determinación adoptada no resulte favorable a los intereses de la parte actora no implica, por sí mismo, una vulneración al principio de exhaustividad ni a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que uno de los rubros calificados como no viables fue el financiero, situación de la cual la parte actora en ningún momento se pronuncia, particularmente cuando en el proyecto se propone la instalación de cuando menos ocho computadoras con internet

Al respecto, tal como lo refirió el órgano dictaminador los argumentos expuestos por la parte actora, tanto en su proyecto como en la posterior aclaración, resultan por si solos insuficientes, para sostener la viabilidad jurídica, financiera y de impacto comunitario de las computadoras para la biblioteca en los términos planteados.

En este sentido, no basta que un proyecto supere uno o varios de los rubros de viabilidad, sino que es menester que supere todos, exigencia que resulta razonable, porque la selección de los proyectos que habrán de ser puestos a la consideración de la ciudadanía en la jornada consultiva deberá ser aquellos que propongan un mejor y mayor beneficio a la comunidad, por ser este uno de los objetivos principales del presupuesto participativo, como mecanismo de participación ciudadana.

De ahí que, el estudio y análisis de cada una de las propuestas que se sometan a consideración del órgano dictaminador deberán superar, todos los rubros del test de viabilidad y factibilidad.

Así, ante lo **infundado** de los agravios manifestados por la parte actora, y al persistir la calificación negativa de más de uno de los rubros, lo conducente es confirmar la inviabilidad del Proyecto.

Sin que sea óbice a lo anterior, que el promovente solicitó en su escrito de demanda que este Tribunal Electoral en plenitud de jurisdicción determine la viabilidad de su proyecto, sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, es que dicha solicitud resulta **inatendible**.

En consecuencia, se declara inviable el Proyecto.

Finalmente, dado que en la emisión de la Convocatoria, el IECM señaló la forma en computar los plazos, así como la fecha límite para promover medios de impugnación en contra de las redictaminaciones, se **conmina** al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que, en futuras Convocatorias relacionadas con la consulta sobre Presupuesto Participativo y, en general, vinculadas con ejercicios de participación ciudadana, se abstenga de señalar fechas concretas relacionadas con los plazos para presentar medios de impugnación. Lo anterior a efecto de evitar confusión en la población y no generar falsas expectativas de derecho.



Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

ÚNICO. Se **confirma** la segunda dictaminación realizada por el órgano dictaminador de la Alcaldía Iztapalapa, respecto del proyecto denominado “Computadoras para la Biblioteca”, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026 y 2027 de la Consulta de Presupuesto Participativo.

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE DE FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS MAGISTRADOS ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ Y OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL, RELATIVO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS ELECTORALES EN LOS QUE SE DESECHAN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA.

ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
MAGISTRADO

LAURA PATRICIA JIMÉNEZ
CASTILLO
MAGISTRADA

**KARINA SALGADO
LUNAR
MAGISTRADA**

**OSIRIS VÁZQUEZ
RANGEL
MAGISTRADO**

**LUCÍA HERNÁNDEZ CHAMORRO
SECRETARIA GENERAL**

“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y los numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, colocándose en la palabra testada un cintillo negro”.



TECDMX-JEL-121/2026
Engrose